

EL desgaste de las democracias en Centroamérica

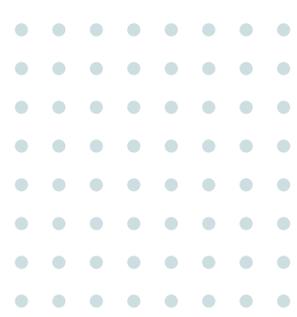
Un compendio analítico que muestra las delgadas conexiones de cuatro países y cómo sus decisiones particulares impactan en su destino común.

El mundo
Y GUATEMALA

El mundo
Y GUATEMALA

PL+

Los hilos que entretajan a Centroamérica



Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua comparten una parte del istmo centroamericano, la más convulsa y con problemas muy similares.

También comparten el desencanto de una parte de su población a los gobiernos electos, denuncias de autoritarismo y represión estatal, además de señalamientos directos sobre corrupción de funcionarios.

Los cuatro países arrastran la salida de ciudadanos que buscan llegar a Estados Unidos para lograr mejores oportunidades socioeconómicas, aunque en el caso de Nicaragua la migración cambia nombre y se llama exilio.

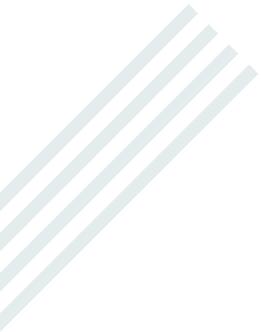
Prensa Libre, cumpliendo con el compromiso de llevar la información más completa, presenta cuatro artículos periodísticos que con profundidad tratan de contextualizar las similitudes de un territorio que atraviesa cambios constantes que deberán determinar el futuro de sus habitantes.

Esos cambios influyen en cada uno de los países centroamericanos y también en su conjunto. En la medida que la democracia se fortalezca o desgaste se verán los efectos en la inversión y generación de empleos.

Desde Bukele, en El Salvador, hasta Ortega, en Nicaragua, Centroamérica tiene de todo y una línea transversal que podría determinar su futuro a corto plazo es precisamente su relación con EE. UU., que (excepto con Nicaragua) intenta estrechar lazos y generar polos de desarrollo a través de la inversión y el combate de la corrupción, para cerrar el paso a la migración irregular a su territorio.

Estos problemas también son parte fundamental que adereza una región volátil pero aferrada a la esperanza de cambio, y es la necesidad de entender qué sucede y hacia dónde va que usted tiene en sus manos estos cuatro análisis, que más que respuestas plantean escenarios que podrían, para bien o mal, concretarse.

Lo invitamos a que los consulte para entender un poco más esas similitudes que nos convierten en una región, para bien o para mal, hermana.



Por Sergio Morales
smorales@prensalibre.com.gt

Analistas en Guatemala y en El Salvador coinciden en que la situación que afronta este país, como el resto de Latinoamérica, es producto del desencanto de los pobladores hacia los pocos resultados que ha dado la democracia.

El 1 de junio del 2019, Nayib Bukele asumió la Presidencia de El Salvador y así comenzó una época marcada por decisiones controversiales que han causado reacciones, no necesariamente favorables, de la comunidad internacional, aunque entre los salvadoreños el mandatario goza de gran popularidad.

Bukele, quien llegó al poder con el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) pero se inició en la política con el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con el que ganó la alcaldía de San Salvador, ha respondido con soberbia a las críticas de EE. UU. y la Unión Europea, al tiempo que ha acentuado las relaciones diplomáticas con China.

Los primeros siete meses del gobernante —un empresario de 41 años, hijo de padre palestino—, transcurrieron con relativa normalidad hasta el 9 de febrero del 2020, cuando, escoltado por policías y militares que portaban rifles de asalto, irrumpió en el Palacio Legislativo salvadoreño para exigir la aprobación de un préstamo que financiaría su plan de seguridad contra las pandillas.

En seguida, en un discurso instó a la población a la insurrección popular, lo que sería el augurio de lo que vendría en los meses siguientes.

Sus planes, sin embargo, se verían atrasados con la llegada de la pandemia del coronavirus, de la cual ha salido más o menos bien librado, de acuerdo con las encuestas.

Sondeos recientes indican que goza de la aprobación del 87% de la población y que el 82% cree que ha manejado bien la pandemia, contra solo un 3%, que considera que lo ha hecho mal.

ELECCIONES Y MÁS PODER

El 28 de febrero último tuvieron lugar las elecciones de medio término, en las cuales se votó por dipu-



FOTO PRENSA LIBRE: AFP

Nayib Bukele tomó posesión de la presidencia de El Salvador en 2019; a partir de entonces su poder público ha crecido y su partido Nuevas Ideas ya controla Cortes y el Congreso, que apoyan las iniciativas oficiales.

El Salvador y sus efectos en la región

Expertos en geopolítica explican por qué la situación que afronta El Salvador podría tener efectos directos en toda Centroamérica.

taciones y alcaldías. Los candidatos de la corriente del mandatario compitieron por el partido Nuevas Ideas y consiguieron una sonora victoria, con la cual tomaron el control de la Asamblea Legislativa, con 56 de los 84 diputados.

Esto significaba que Bukele ya no necesitaría de consensos o apoyo de otros partidos para pasar las leyes que quisiera, lo cual preocupó a analistas y a la oposición salvadoreña, que veía un riesgo de concentración del poder.

Los temores se hicieron realidad apenas dos meses después, pues la noche del 2 de mayo, en la primera sesión de la legislatura electa en febrero, los diputados destituyeron a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Dicha sala había bloqueado al menos 15 medidas impuestas por Bukele para contener la pandemia, la mayoría relacionadas con la restricción de libertades. En esa misma sesión, la Asamblea también destituyó



FOTO PRENSA LIBRE: AFP

El 9 de febrero del 2020 Bukele ingresó con militares al Palacio Legislativo para exigir la aprobación de un préstamo.

yó al fiscal general.

La Constitución salvadoreña permite la destitución por parte del Legislativo de los magistrados constitucionales, “por causas específicas, previamente establecidas por la ley”, pero los detractores afirman que los

jueces fueron removidos sin ningún proceso que ahondara en las posibles causas y sin siquiera darles la oportunidad de defensa.

MÁS DECISIONES

Técnicamente, el presidente no tiene nada que ver con

las decisiones del Legislativo, pero no pudo ocultar su emoción por la destitución de los magistrados esa noche, al tuitear: “Y el pueblo, a través de sus representantes, dijo ¡DESTITUIDOS!”.

Cuatro meses después, los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional hicieron una cuestionada interpretación de la Carta Magna y aprobaron la reelección presidencial consecutiva.

Esta medida implica que Bukele podría participar en las elecciones del 2024 para seguir gobernando hasta el 31 de mayo del 2029.

En junio último, la Asamblea también aprobó otra iniciativa de Bukele, y con ella El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en aceptar el bictón como moneda de curso legal. La aprobación se dio sin mayor debate y sin analizar los riesgos, afirman analistas.

DEMOCRACIAS DÉBILES

En Guatemala, analistas consultados creen que la coyuntura de El Salvador debe preocupar a Guatemala y consideran que lo que ocurre actualmente en ese país ha minado la estabilidad de Centroamérica, necesaria para mantener la paz social, no volver al pasado, atraer inversiones y abrir el camino al desarrollo.

El excanciller y analista político Édgar Gutiérrez opina que la región se enfrenta a un dilema de renovar sus sistemas democráticos, con nuevos modelos de participación política y formas de fiscalización y rendición de cuentas, o se ensanchará el camino hacia regímenes más autoritarios, lo que sería “un retroceso de 40 años”.

Aunque considera que cualquier problema que ocurra en “el vecindario” afecta directa o indirectamente, cree que más que una influencia negativa para el país, lo que está pasando en El Salvador es lo mismo que sucede en Guatemala: la conclusión de “procesos de debilitamiento de las democracias y el agotamiento de los sistemas políticos”.

“Cada país ha seguido su rumbo, pero el resultado ha sido el mismo”, señala el analista. “Los procesos democráticos abiertos en los 80 ya no están respondiendo a la población, se corrompieron y se están carcomiendo y degradándose a sí mismos”, comentó.

Según Gutiérrez, en El Salvador Bukele ha sido eficaz y ha dado resultados, con lo cual capitalizó el descontento de la población con la clase política. Luego, “aprovechando esas ventajas”, ha dado muestras de “borrar la separación de poderes con el pretexto de limpiar el Poder Judicial”, pero en la práctica se está convirtiendo en un régimen autoritario.

En Guatemala, añadió, ocurre lo mismo. El presidente Alejandro Giammattei no ha sido eficaz, por lo cual la dictadura acá no es personalista, sino corporativa, y “no importa quién sea el presidente, la agenda de debilitamiento del Estado y las libertades civiles es la misma”.

DESENCANTO

El historiador y analista político José Alfredo Calderón expuso que la manipulación de las masas “es muy

“Los procesos democráticos abiertos en los 80 ya no están respondiendo a la población, se corrompieron y se están carcomiendo y degradándose”.

Édgar Gutiérrez, analista político y excanciller de Guatemala

“Al fin y al cabo el populismo es un subproducto de la democracia, fruto de la descomposición de los partidos políticos”.

Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador

fácil en países como los nuestros”, y aunque Bukele pueda mostrar actitudes dictatoriales, lo cierto es que estas no son tan rechazadas por los pueblos, debido a un desencanto general con la democracia.

Citó como ejemplo el caso venezolano, donde la gente empezó a rechazar su sistema político y los partidos tradicionales, producto de lo cual Hugo Chávez llegó al poder. Esto, a su criterio, es lo mismo que sucedió en El Salvador, con la elección de Bukele.

Al hablar de posibles efectos en Guatemala, Calderón indicó: “Es contradictorio decir que puede resultar afectada nuestra democracia”, porque “lo que tenemos es una dictadura corporativa” con una democracia de fachada, donde solo “hay un simulacro de elecciones cada cuatro años”.

Sin embargo, explicó, ese rechazo por la política tradicional y el sistema democrático que no produce resultados ha causado que a los guatemaltecos no les importe si los gobernantes tienen planes o programas de gobierno, sino que votan por cualquier candidato.

“Si las élites siguen con esa ceguera, con un carácter conservador a ultranza, no verán que están cultivando el germen de su propia destrucción. La gente todavía cree en la democracia, pero, si no, solo le quedará la violencia”, lo cual es “peligrosísimo”, enfatizó.

CIUDADANÍA ACTIVA

Daphne Posadas, licenciada en Relaciones Internacionales, advirtió de que

Guatemala debe prestar atención a estas “regresiones democráticas”, como la que ocurre en El Salvador, y señaló el riesgo en que se encuentra el país, “si no se producen los cambios necesarios para mejorar la percepción de la ciudadad-

nia” respecto de la política.

Posadas añadió que, como en El Salvador y muchos países de Latinoamérica, Guatemala reúne las condiciones para facilitar discursos populistas que ofrecen mejorar las con-

diciones de vida de los más pobres y utilizan las instituciones para llegar al poder, pero una vez en este hacen lo posible por destruirlas.

“Esto es el equivalente a cambiar las reglas del juego una vez comenzado el partido”, puntualizó.

La democracia liberal es un sistema político imperfecto, pero no se conoce otro mejor, recordó Posadas. Sumado a esto, las malas gestiones de los gobiernos y el desencanto de la ciudadanía con la política ha hecho que pierda sus virtudes, y ahí es cuando los discursos que prometen cambios radicales son mejor recibidos.

“Si seguimos esa ruta, es probable que el deterioro de la democracia continúe”, pero “si los ciudadanos reconocen el rol que deben jugar y cumplir en la democracia, las cosas pueden ser distintas”, enfatizó.

“Debemos ser más exhaustivos, ser ciudadanos más activos”; de lo contrario, estaremos premiando al secretismo y la corrupción, alertó.

RELACIÓN CON EE. UU.

El politólogo Renzo Rosal afirmó que uno de los primeros efectos de Bukele hacia Guatemala es que ha transmitido su “altanería” con la que se dirige a EE. UU. al presidente Giammattei, a pesar de la ayuda que ese país ha brindado al país.

El distanciamiento entre Guatemala y EE. UU. puede llegar a un nivel peligroso, ya que el país tiene una dependencia histórica, y esa relación “no se va a modificar”.

“Dependemos de EE. UU. comercial, política y económicamente. Pelearse con ellos es el peor error que se puede cometer”, dijo Rosal.

El analista Édgar Gutiérrez ve otro problema, que a raíz del mandato de Donald Trump EE. UU. se ha dividido, y ahora no hay bipartidismo en su país y la clase política está fragmentada. Esto hace que “los grupos corruptos y autoritarios de la región busquen a los aliados de Trump y a la vez señalarán a los demócratas de comunistas”.

“El gobierno de EE. UU. ve esto con mucha preocupación, quiere entrarles a los problemas de raíz, pero no tiene con quién hablar en la zona”, comen-

tó Gutiérrez.

“Giammattei, Bukele y otros hubieran preferido a un Trump que solo les dijera qué mandado quiere y que cada quien se ocupe de hacer lo que mejor le conviene”, agregó.

SITUACIÓN EN EL SALVADOR

Analistas salvadoreños ven un futuro poco alentador y confirman una concentración progresiva de los tres poderes del Estado en la figura del presidente Bukele, luego del cambio de los magistrados constitucionales a cargo de un Congreso que solo obedece las órdenes de la Casa Presidencial y aprueba leyes sin ningún debate o consenso.

Ahora temen que el presidente modifique la Constitución para reactivar viejos mecanismos represivos y así perpetuarse en el poder tanto tiempo como le sea posible.

Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, dijo que la situación debe alertar a Guatemala porque, si los partidos y liderazgos políticos no reaccionan a tiempo, y en la medida que la democracia no responda a la ciudadanía, puede surgir algún caudillo populista que emule a Bukele. Al fin y al cabo “el populismo es un subproducto de la democracia, fruto de la descomposición de los partidos políticos”, recordó.

Oscar Martínez, jefe de Redacción del medio de comunicación El Faro, escribió recientemente una columna en la que indica que El Salvador “ya no es una democracia imperfecta”, sino “un régimen híbrido con fuertes elementos de autoritarismo”. Pese a ello, advierte, “lo peor está por venir”.

Martínez asegura que la estrategia de Bukele es “hacerlo todo rápido, mientras conserve su alto índice de aprobación y antes de que más gente abra los ojos”.

También señala una reacción tardía y “timorata, sino completamente cobarde”, de la comunidad internacional.

Además, anticipa que pronto podrían ocurrir en El Salvador “medidas similares a las que vive Nicaragua: encarcelamiento y persecución de periodistas, activistas y opositores políticos, con casos armados a voluntad del presidente Daniel Ortega”.

REACCIÓN**Contra medios críticos**

● El jefe del grupo de diputados del partido oficialista, Nuevas Ideas (NI), en el Congreso de El Salvador, Christian Guevara, dijo ayer que recuperarán el dominio de elsalvador.com, del que es propietario el periódico *El Diario de Hoy*, al que señaló de “destruir nuestra imagen”.

“Vamos a recuperar el dominio de <http://elsalvador.com> y se lo vamos a devolver a los salvadoreños”, advirtió en Twitter, sin precisar si ello implicaría la expropiación u otro mecanismo.

Añadió: “Es nuestro nombre. El Salvador es sagrado, no el nombre de ninguna marca privada; no es para hacer dinero a costa de nuestra patria”.

“El dominio de <http://elsalvador.com> debe ser la ventana electrónica de este nuevo El Salvador como país al mundo, no el sitio de un medio que se dedica a pedir sanciones para nuestro país y destruir nuestra imagen”, sostuvo.

El diputado Romeo Auerbach, de la también oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), respaldó la iniciativa e indicó: “Lo vamos a recuperar para nuestro país”, respecto del dominio del medio en mención.

La abogada Marcela Galeas respondió a las publicaciones de Guevara e indicó que el dominio es “marca registrada”, por lo que “tiene protección por acuerdos y tratados internacionales”.

La Asociación de Periodistas de El Salvador registró 167 agresiones contra la prensa entre enero y julio del año en curso; la mayoría de parte de diferentes instituciones gubernamentales.

Según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF), publicado en abril último, América Latina es el continente donde más se degradó la libertad de prensa en el 2021, con un empeoramiento de la situación, particularmente palpable en Brasil y El Salvador.



Por Sergio Morales

smorales@prensalibre.com.gt

Siete meses después de que el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, figurara en el testimonio de un narcotraficante confeso en una corte de Nueva York, EE. UU., las cosas en ese país parece que no han cambiado mucho, y ahora se prepara a celebrar elecciones generales, el 28 de noviembre, con candidatos que también han sido señalados de delitos de narcotráfico.

Honduras lleva más de una década inmerso en una convulsa realidad política en la que se cuenta un golpe de Estado, una reelección presidencial —que estaba prohibida por la Constitución— y señalamientos de convertirse en un narcoestado.

Ese país, que comparte una frontera de 256 kilómetros con Guatemala, no es ajeno a las problemáticas que tienen otros de sus hermanos centroamericanos, como Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

En marzo recién pasado ocurrió algo que ya veían venir los hondureños desde hace dos años, el presunto involucramiento del presidente Hernández en narcotráfico. Casi tres años antes, su hermano, Juan Antonio Hernández, había sido detenido en un aeropuerto de Miami, EE. UU.

Luego, fue hallado culpable por el tráfico de 185 mil kilos de cocaína hacia ese país y el 30 de marzo pasado fue sentenciado a cadena perpetua.

El mandatario hondureño siempre negó las acusaciones hacia su hermano, pero en el juicio que se sigue en EE. UU. en contra del exlíder de *Los Cachiros*, Geovanny Fuentes Ramírez, también él resultó señalado, cuando un testigo protegido lo acusó de haber recibido dinero cuando era diputado y candidato presidencial por el Partido Nacional.

Literalmente, el presidente Hernández habría dicho: “Le vamos a meter droga a los gringos en sus propias narices, y no se van a dar cuenta”. Asimismo, aseguraba que la justicia hondureña no los perseguiría porque el fiscal general iba a protegerlos.

De esta cuenta, la Fiscalía de Nueva York inició una investigación en contra del mandatario hondureño.



FOTO PRENSA LIBRE: CARLOS HERNÁNDEZ

La pobreza y la violencia son los principales detonantes de las multitudinarias caravanas de hondureños que salen hacia EE. UU. en busca de asilo.

Honduras y la tríada que comparte con Guatemala

Narco, corrupción y migrantes son problemas que afectan y determinan el futuro de ambos países.

reño.

Pero esa sindicación, que en otro país habría supuesto un terremoto político, en Honduras causó poco más que un revuelo, y con el tiempo ha comenzado a desvanecerse y la sociedad ya está enfocada en las nuevas elecciones.

Pero los señalamientos no han sido solo contra la familia Hernández. De hecho, Devis Leonel Rivera, otro exlíder del mismo cartel hondureño, testificó que el narcotráfico entregó sobornos al actual mandatario hondureño y al resto de gobernantes, por lo menos desde el 2006, a cambio de protección y de contratos gubernamentales para lavar dinero de la droga, aunque todos los negan.

Este año, EE. UU. sancionó al expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), a su esposa y a tres hijos, porque aseguró que cuando Lobo estuvo en el poder también aceptó dinero del narcotráfico a cambio de

favores políticos. Además, uno de los hijos de esta familia purga prisión en aquel país, también por tráfico de estupefacientes.

Lobo y su esposa forman parte de los 21 funcionarios y exfuncionarios hondureños incluidos en la Lista Engel de señalados por casos de corrupción, publicada por el Departamento de Estado de EE. UU. Este nada honroso listado lo completan —por ahora— 14 salvadoreños y 21 guatemaltecos.

SIMILITUDES

Aunque cada país tiene sus propios matices, entre Guatemala y Honduras se distinguen ciertas similitudes. Por ejemplo, aunque no la justicia como tal, el Gobierno de EE. UU. hizo recientemente fuertes señalamientos contra la fiscal general Consuelo Porras de favorecer prácticas corruptas. La jefa del Ministerio Público engrosó la lista Engel a 21, curiosamente el mismo número de hondureños.

La migración es otro se-

“El esquema que usan es el mismo en la mayoría de los países. O apoyan lo que dice el Ejecutivo o los quitamos del camino”.

Graco Pérez, internacionalista hondureño

ANÁLISIS

Narcotráfico

● En Guatemala, hay quienes temen que el país pueda “contagiarse” de lo que está pasando en Honduras y que poco a poco el crimen organizado termine por cooptar la institucionalidad para beneficiar sus actividades ilícitas.

“No ha llegado a los niveles de cooptación de Honduras. Por ejemplo, una reelección presidencial es impensable acá y debería pasar por una lucha política muy profunda que significaría sacrificar la Constitución”, dijo el analista político Christians Castillo.

El internacionalista Alexander Sandoval considera que de haber consecuencias por lo ocurrido en Honduras podría ser en las políticas que EE. UU. tiene hacia los países.

Sandoval cree que catalogar a Honduras como un narcoestado es prematuro. No obstante, la coyuntura debería ser aprovechada por los gobiernos para replantear estrategias de fortalecimiento en la lucha contra el narcotráfico, ya que “si este fenómeno existe es porque hay un mercado potencial” que está fuera de Centroamérica.

RELACIONES

Desafío a EE. UU.

●El problema para EE. UU. es que se está quedando sin interlocutores en la región cuando estos países, principalmente Guatemala, son cruciales para detener la migración.

“El —Juan Orlando Hernández— en este momento es el presidente elegido de Honduras, vamos a trabajar con su Gobierno, vamos a buscar áreas de interés común”, dijo Juan González, asesor del presidente Joe Biden para asuntos de Latinoamérica, semanas después de que se conocieran las sindicaciones al mandatario.

Ya un grupo de abogados de un bufete de

Washington contratado por el Gobierno de Honduras para tratar de influir en el proceso contra Tony Hernández había advertido a los fiscales que llevaban el caso de “consecuencias colaterales” por los señalamientos, en el relacionado a las bases militares de EE. UU. en el país y en “asuntos migratorios”.

Analistas hondureños consideran que EE. UU. y la comunidad internacional deben reaccionar con más firmeza. “No se va a poder salir adelante sin el apoyo externo porque la institucionalidad en Honduras está cooptada”, concluye el analista hondureño Graco Pérez.



FOTO: HEMEROTECA PL

Manifestaciones sociales son frecuentes en Honduras, en contra de las decisiones presidenciales.



FOTO PRENSA LIBRE: AFP

Juan Orlando Hernández lleva dos períodos seguidos como presidente de Honduras. En noviembre hay elecciones.

REALIDADES

Migración

● Al igual que en Guatemala, la migración de personas jóvenes a EE. UU. pone en peligro el bono demográfico. El Observatorio de las Migraciones Internacionales en Honduras (Omih), señala que para 2040 “el país habrá perdido su

bono demográfico y con él su capital humano”.

Una encuesta presentada este año por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, publicada por el medio digital Criterio, señala que el 40% de los hondureños están dispuestos a migrar.

Hasta ahora, en las estadísticas de EE. UU., Guatemala y Honduras

son los países de donde más migrantes intentar ingresar de manera irregular.

Además, la frontera de Honduras con Guatemala es muy porosa y es por ahí donde ingresan cientos de migrantes continentales y extrac Continentales. Analistas explican este fenómeno en el débil control fronterizo y la corrupción que permea a las autoridades.



FOTO: HEMEROTECA PL

La violencia política en Honduras también acapara la atención, sobre todo a dos meses de las elecciones.

llo de ambos países. Desde Centroamérica, sus ciudadanos son los que más huyen hacia el norte. En cuatro años, de los 1 mil 627 millones de migrantes que llegaron a EE. UU. procedentes del Triángulo Norte, el 86 por ciento era de estos dos países —44% de Guatemala y 42% de Honduras—.

A esto se le añaden los indicadores sociales de los cuales comparten grandes similitudes, en cuanto a la economía informal, delincuencia y falta de acceso a

la educación y salud. El Informe de Desarrollo Humano 2020, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, sitúa a Guatemala en el puesto 127 y a Honduras en el 132.

Además, según datos del Banco Mundial, la pobreza aumentó de 56% a 59.3% del 2000 a 2014 en Guatemala, mientras que en Honduras apenas al 2018 se situaba en 49.3%, mientras que en relación a la pobreza extrema, definida como las personas que viven con US\$1.90 al día o menos,

Guatemala tiene al 8.8% de su población en esa condición y Honduras al 16.9%.

REPITEN PATRONES

El analista hondureño en derecho internacional, Graco Pérez, señaló que los señalamientos en contra del presidente Hernández y otros dirigentes de la clase política del país “no ha tenido el impacto que cualquiera pudiera suponer que tendría”.

Población, autoridades y los partidos políticos ya se han acostumbrado a los señalamientos de narcoestado y narcogobierno, pero no toman mayores acciones.

Parte de la apatía de la población se debe a la cooptación de todas las instituciones hondureñas que los hace sentir miedo de

salir a manifestar; además, hay un esfuerzo por debilitar a organizaciones de la sociedad civil, señala el analista hondureño.

Recién la semana pasada el Congreso aprobó reformas Código Penal, Código Procesal Penal y la Ley contra el Lavado de Activos, que dificultarán las investigaciones por actos de corrupción y da vía libre para que organizaciones civiles sean investigadas. Otro paralelismo con Guatemala.

Pérez considera que lo que ocurre en Honduras tendrá implicaciones en Guatemala, El Salvador y Honduras, en la medida que los gobernantes hagan “lo que quieran” sin que haya ninguna consecuencia.

Como ejemplo, recordó que lo que pasó en El Salvador con la destitución de

los magistrados constitucionales ya había pasado en Honduras, en diciembre del 2012, con la salida forzosa de cuatro magistrados, cuyos reemplazos avararon dos años y medio más tarde la reelección de presidencial por primera vez.

En El Salvador, el mes pasado, lo magistrados que tomaron posesión el 1 de mayo de 2021 habilitaron la reelección presidencial inmediata.

Ese, a consideración de Pérez, fue el camino que tomó el régimen de Daniel Ortega para perpetuarse en el poder y es a lo que se encaminan las otras tres naciones centroamericanas.

“El esquema que usan es prácticamente el mismo en la mayoría de los países. ‘O apoyan lo que dice el Ejecutivo o los quitamos del

camino usando al Legislativo’, toman el control de todas las instituciones y pues... ese es el problema”, apuntó el analista hondureño.

A juicio de Pérez los países centroamericanos “no hemos aprendido a vivir en democracia”. Antes era el comunismo, los golpes militares y el ataque a movimientos subversivos, pero ahora se debilita a la democracia desde el estado mismo que toma el control de las instituciones con corrupción y narcotráfico.

“Somos tan parecidos los países en política, no asesora la misma gente que no tiene buenas intenciones y que busca el poder con el afán del poder mismo, y la visión de desarrollo y mejorar el país se ha perdido en esa lucha de poder”, dijo.

“Se condena a que se siga teniendo fuerte influencia del narco en procesos electorarios y compra de partidos políticos”.

Christians Castillo, politólogo de la Usac

Por Sergio Morales
smorales@prensa Libre.com.gt

La realidad de Nicaragua no es ajena a la guatemalteca, pues ambos países afrontan momentos difíciles, resultado de democracias disfuncionales que no han ayudado a sus poblaciones a alcanzar el anhelado desarrollo económico y social.

Pero Nicaragua parece que va más “adelantado” que el resto de sus vecinos al vivir, lo que muchos aseguran, una dictadura en la práctica, disfrazada de democracia, con procesos electorales cada cinco años en los que en las últimas tres ocasiones ha resultado electo Daniel Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Al igual que en Honduras, la reelección continúa en Nicaragua estaba prohibida por la Constitución y desde 1985, cuando la democracia del país comenzó a estabilizarse, se había respetado ese precepto.

Fue en el 2011 cuando Ortega, que había sido electo por segunda ocasión en el 2006 –la primera fue en la década de los ochenta, cuando gobernó de 1985 a 1990–, logró ser reelecto, luego de un polémico fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del 2009, que declaró inaplicable el artículo 147 de la Carta Magna que prohibía la reelección continua o que optara a la presidencia alguien que ya hubiera gobernado el país dos veces.

Aunque dicha resolución fue declarada nula por la Asamblea Nacional, Ortega, en sus ansias de poder, impulsó una reforma constitucional en el 2013 que fue aprobada por el Poder Legislativo, dominado por él, y que incluía el derecho del presidente a la reelección indefinida.

De esa forma, Ortega, que con el paso de los años ha aumentado su hostilidad hacia EE. UU. al mismo tiempo que afianza sus relaciones con China y Rusia, consiguió ser reelecto en el 2016, en un proceso calificado de opaco por la comunidad internacional.

Ahora, el 7 de noviembre próximo, intentará de nuevo la reelección para ser presidente hasta el 2027.

En las elecciones del 2016, Ortega, en una muestra más de sus aspiraciones



FOTO PRENSA LIBRE: REUTERS

Daniel Ortega de nuevo competirá el próximo 7 de noviembre por la presidencia de Nicaragua.

Las lecciones que se deben aprender de Nicaragua

dictatoriales, nombró a su esposa, Rosario Murillo, que de facto ya ejercía múltiples funciones dentro del Gobierno, como candidata a la Vicepresidencia del país, con lo cual se aseguraba que de no estar él al frente del Ejecutivo, el mando quedaría en familia.

PROTESTAS Y UN ESTADO A SU SERVICIO

En el 2018 estallaron múltiples manifestaciones en contra del régimen orteguista. La gota que derramó el vaso fue un ataque de simpatizantes del Gobierno en contra de un grupo de pensionados que protestaba contra las reformas al sistema de pensiones.

A partir de ahí, las manifestaciones se incremen-

El poder que ostenta el clan Ortega-Murillo es un reflejo de lo que no se debe hacer en un Estado, dicen analistas.

taron, lo que causó una feroz represión del Gobierno que culminó con más de 320 muertos, decenas de heridos y otros tantos ex-

liados.

A la par de las duras críticas de la comunidad internacional por el proceder con tintes dictato-

“Un Estado que no es capaz sino de lograr un 3 por ciento de condenas de los actos ilegales que se juzgan, es fallido”.

Aldo Bonilla, internacionalista y catedrático universitario

“conspiración” y “lavado de dinero”.

La cacería que la pareja presidencial ha emprendido desde marzo pasado ha dejado por el momento a 37 líderes opositores detenidos, entre ellos siete que se perfilaban como candidatos a la primera magistratura del país, con lo cual Ortega se allanó el camino para conseguir la victoria electoral, según sus críticos.

Esto ha llevado a los detractores del presidente a asegurar que, más que elecciones, lo que ocurrirá en unas semanas será una “farsa” y un “circo electoral”.

SECUELAS

Enrique Sáenz, analista político nicaragüense, señala que a Ortega “no le bastó reformar la ley electoral a su gusto y antojo ni cancelar los derechos de reunión o imponer leyes represivas para inmovilizar y amordazar al pueblo y medios de comunicación, sino que canceló a los partidos políticos sospechosos de ser opositores”.

En Nicaragua, añadió el analista, “desde hace varios años se instaló una dictadura que anuló la Constitución, las leyes y las libertades y derechos ciudadanos”, pero de lo cual, la comunidad internacional no se percató hasta el 2018, cuando estallaron las protestas ciudadanas, “que fueron sofocadas a sangre y fuego”.

Por su parte, el sociólogo y economista Oscar René Vargas, también nicaragüense, considera que las cicatrices que está dejando la “dictadura Ortega-Murillo tardarán muchos años en cerrar” y que “las secuelas de las crisis no resueltas, económica, social, política, sanitaria e internacional, van a profundizar las desigualdades” en el país.

¿ESTE PANORAMA DEBERÍA ENCENDER LAS ALERTAS EN GUATEMALA?

Analistas consideran que los modelos tienden a ser copiados, sobre todo en países latinoamericanos, que llevan décadas tratando de consolidar –sin éxito– modelos de desarrollo para sacar a sus ciudadanos de la pobreza.

El exembajador de Guatemala en las Naciones Unidas, Luis Padilla, teme que nuestro país ya se esté “contagando” del modelo

de Ortega-Murillo, en el cual se prohíbe la participación a ciertos candidatos y se persigue penalmente a medios de comunicación con el objetivo de callarlos y hasta cerrarlos.

“Y van a seguir el mismo camino con otros partidos políticos, si no se alinean”, remarca Padilla, mientras que en cuanto a señalamientos hacia medios de comunicación, teme que estos se puedan extender hacia otros.

El embajador dice que, contrario a Nicaragua, donde la dictadura es unipersonal y gira en torno a la figura de Daniel Ortega y su familia, en el caso de Guatemala se tiene a una dictadura corporativa impulsada por ciertos sectores económicos, el crimen organizado y otros actores corruptos.

Sin embargo, afirma que en Guatemala “falta mucho todavía para llegar a los niveles de Nicaragua” y que evitarlo dependerá, en buena medida, de la oposición decidida de la sociedad civil, el apoyo de los “empresarios decentes” y de las fuerzas democráticas de la comunidad internacional.

Sáenz señala que la historia ha demostrado que en los países centroamericanos nos funcionan “vasos comunicantes” que tarde o temprano afectan a la región.

Hoy en día, lo que más le preocupa, es la petición de armamento sofisticado y entrenamiento al Ejército que el régimen de Ortega hizo a Rusia, porque eso pondría a la región en el centro de conflictos entre las potencias.

“Los síntomas del contagio son ya evidentes. Pero igual que el covid-19, depende de cada organismo, su capacidad de resistir.

Para unos se reduce a una gripe, para otros hay que hospitalizar y otros pacientes deben ir a cuidados intensivos. A veces los desenlaces son fatales”, subrayó.

“Nuestros países, lamentablemente, han padecido las mismas enfermedades; en consecuencia, las recaídas son más probables que en cuerpos sanos”, agregó Sáenz.

ESTADOS FALLIDOS

Aldo Bonilla, internacionalista y catedrático universitario, coincide en que “la situación de Nicaragua y Guatemala no dista mucho

EXPECTATIVA

Opositores ya pronostican un fraude electoral

● La opositora Coalición Nacional de Nicaragua anunció esta semana que la diáspora y los exiliados nicaragüenses marcharán en todo el mundo el 7 de noviembre próximo, en rechazo a las elecciones generales que se celebrarán ese día en el país, en las que el presidente Daniel Ortega busca otra reelección.

“Los que están o estamos en el exilio y la diáspora, nos movilizaremos por todas las ciudades del mundo en repudio al fraude electoral y

demandando la libertad de los presos políticos, el retorno seguro de los exiliados y elecciones justas y verdaderas”, señaló la Coalición Nacional, en una declaración pública.

Ese bloque opositor reiteró: “Desconocemos los falsos y prefabricados resultados que se darán a conocer” por las autoridades electorales, controlados por el oficialismo.

La Coalición Nacional está compuesta por los grupos opositores Unidad Nacional Azul y Blanco,

integrada principalmente por quienes lideraron las manifestaciones contra el gobierno de Ortega en abril del 2018, así como el Movimiento Campesino Anticanal y la Fuerza Democrática Nicaragüense, de antiguos “contras”.

Ese grupo opositor afirmó que en las elecciones de noviembre “el orteguismo compite solo, se mide a sí mismo, en su afán de perpetuar un sistema de partido único sin ningún tipo de competencia electoral por el poder, que, irremediamente,

desembocará en la ilegitimidad de su régimen”.

La organización recordó que el proceso electoral se ejecuta bajo árbitros electorales sandinistas, con leyes restrictivas, sin observación internacional ni local, tras la eliminación de tres partidos opositores, así como el encarcelamiento de 155 presos políticos, entre ellos 37 líderes y profesionales independientes, incluidos siete aspirantes a la Presidencia de la República.

cén) no han sido capaces de actuar en concordancia con el espíritu para el cual fueron creados.

¿CONSECUENCIAS ECONÓMICAS?

Los acontecimientos en Nicaragua no dejan de despertar inquietudes en el sector económico guatemalteco, sobre todo porque los cambios hacia regímenes menos democráticos hacen que la inversión y las empresas tengan desconfianza de esos sistemas.

Enrique Lacs, experto en comercio internacional y director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, destacó que siendo Nicaragua parte del entorno económico de Guatemala, existe un dinámico intercambio comercial y de inversiones.

En el primer semestre del 2021, destacó, Guatemala exportó mercancías por US\$384.5 millones e importó US\$101 millones.

“Esta relación puede afectarse, si no se mantiene el cumplimiento de las normas comerciales que nos unen o si la actividad económica en Nicaragua se ve disminuida por efectos de su política interna”, advierte.

En referencia a posibles cambios que EE. UU. pueda adoptar con la región a raíz de la crisis en Nicaragua, Lacs dice que esa potencia mundial está vinculada con Centroamérica por medio de un Tratado de Libre Comercio (TLC), y que “sería indeseable e ilegal” un cambio de las reglas de forma unilateral, en referencia a la Ley Renacer, que podría derivar en una expulsión de Nicaragua de este convenio comercial.

Añadió que una ley que promueva el rompimiento de las disposiciones del TLC sería “muy desventajosa para todas las partes”, y en el caso de Guatemala, se verían afectados los encadenamientos productivos y comerciales que mantiene con los países de la región.

ALIADOS

Nicaragua forma parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América –Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP)–, que fue fundada el 14 de diciembre del 2004, y que además integran Cuba, Venezuela, Bolivia, Antigua y Barbuda, Dominica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada y San Cristóbal y Nieves.



FOTO PRENSA LIBRE: AFP

Protestas contra Ortega son comunes, así como la represión del Estado hacia los opositores del régimen, lo que ha llevado a cientos de nicaragüenses a salir al exilio.

de ser similar”, con organismos ejecutivos que actúan fuera de su marco de legalidad y entorpecen procesos constitucionales, abusan de su poder y hacen oídos sordos a la tensión que se genera con EE. UU. debido a señalamientos de debilitamiento de las instituciones democráticas.

Además, ambos países, como otros ejemplos en Latinoamérica, comparten indicadores democráticos que denotan Estados “frágiles, sinónimo de fallidos”, que han sido incapaces de gobernarse a sí mismos y de manera coherente, con los principios

de la democracia, dice Bonilla. Estas naciones, añadió, requieren de medidas de “alto impacto” para salir de sus graves condiciones de vida.

“Un país que obliga a sus ciudadanos a caminar más de tres mil kilómetros para encontrar mejores condiciones de vida es un Estado fallido. Un Estado que no es

capaz sino de lograr un 3 por ciento de condenas de los actos ilegales que se juzgan, es un Estado fallido. Un Legislativo que está de la mano, no de intereses de las comunidades que representa, sino de sectores criminales o económicos, es un Estado fallido”, remarca el analista.

“Guatemala se encuen-

“No le bastó reformar la ley electoral a su gusto y antojo ni cancelar los derechos de reunión o imponer leyes represivas”.

Enrique Sáenz, analista político nicaragüense.



Por Sergio Morales
smorales@prensalibre.com.gt

Los destinos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua han ido de la mano desde tiempos de la Colonia. Las guerras internas, dictaduras militares y, ahora, sus frágiles democracias los hacen hermanos muy parecidos que hasta tienen en común el libre tránsito entre sus territorios.

No es casualidad que las cuatro naciones compartan pobres indicadores sociales. El más reciente índice de Desarrollo Humano, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo las ubica entre los puestos 124 al 132, de 189 países evaluados.

Con la economía más grande de estos cuatro países, Guatemala parecía ser el caso menos grave. Al menos, hasta hace poco EE. UU. lo veía como un socio confiable y prueba de ellos fue la visita de la vicepresidenta Kamala Harris y la donación de 4.5 millones de vacunas contra el covid-19.

Además, en la memoria están aún las manifestaciones que en el 2015 se levantaron en contra del gobierno de Otto Pérez Molina y que terminaron con su renuncia y la de su vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión hoy en día.

Pero después de estas muestras de descontento social que suponían un nuevo comienzo del sistema político guatemalteco, comenzó lo que algunos consideran un declive paulatino de la democracia y la institucionalidad.

INICIA SEPARACIÓN

Analistas consultados coinciden en que los últimos cinco años han marcado un distanciamiento de Guatemala con su socio principal, EE. UU., y las razones siempre son las mismas: el sector judicial y la lucha contra la corrupción.

Para empezar, el gobierno de Jimmy Morales expulsó al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, que, en el 2015, junto con el Ministerio Público (MP) había dirigido las investigaciones de actos de corrupción de la pareja presidencial que detonaron las protestas. También había



FOTO PRENSA LIBRE: MARÍA JOSÉ BONILLA

Este año, las protestas contra el Gobierno se han incrementado, al extremo de que un grupo de supuestos veteranos incendió el edificio del Congreso.

Guatemala encabeza una región que se deteriora

Analistas advierten de que **el país ha tomado decisiones desfavorables y desgasta su relación con EE. UU.**

investigado a familiares del mandatario Morales.

La decisión le significó al gobierno de Morales fuertes críticas en el país y en el extranjero, pero las resistió, a pesar de una dura batalla legal que implicó cuestionadas interpretaciones de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) que rayaron en la desobediencia, en cuanto a que la máxima Corte había permitido el regreso de Velásquez a Guatemala, puesto que se encontraba en EE. UU., cuando el Gobierno lo declaró no grato.

Finalmente, Velásquez ya no regresó.

Ya en el gobierno de Alejandro Giammattei, el tiempo de vida de la Cicig expiró y ya no se pidió a las Naciones Unidas, organis-

mo al cual pertenecía la esa entidad, otra extensión de su mandato, pese a que esa comisión de la ONU gozaba de una notable aceptación en el país, según publicó una encuesta elaborada por ProDatos para *Prensa Libre* en abril del 2019, donde el 72% de la población estaba de acuerdo con su continuidad.

RETRASOS EN LA JUSTICIA

No se puede dejar afuera a la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) que recién

cumplió dos años de ejercer en sus funciones. Los 13 magistrados que la conforman fueron electos por un supuesto pacto entre los extintos partidos Patriota y Líder, en el 2014, y debieron haber dejado el cargo el 13 de octubre del 2019.

No han sido sustituidos después de que una resolución de la CC ordenó la elección de magistrados idóneos, luego de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) denun-

ciara vicios en el proceso. La resolución no ha sido obedecida porque los diputados oficialistas han hecho su propia interpretación de las leyes y hasta el día de hoy no eligen nuevos magistrados.

Contrario a la CSJ, la CC sí fue renovada en octubre del año pasado. La anterior Corte, con sus resoluciones, habían sido incómodos al Congreso y a las administraciones de Morales e incluso a la de Giammattei.

De esa cuenta, los diversos actores se las ingeniaron para elegir una CC que no representara un obstáculo, según analistas, y la única magistrada que podría considerarse una piedra en el zapato, Gloria Porras, que había sido reelecta en re-

presentación de la Universidad de San Carlos de Guatemala no logró tomar posesión de su cargo.

De nuevo, interpretaciones dudosas de leyes y de resoluciones judiciales fueron el fundamento del Congreso para no juramentarla en un nuevo período. Porras era bien vista por EE. UU., país que, luego de la no juramentación, emitió fuertes críticas.

Pero la relación Guatemala-EE. UU. se deterioraría aún más.

En julio pasado, la fiscal general, Consuelo Porras, destituyó al jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval a sabiendas de que la acción le significaría el rechazo absoluto del Gobierno de EE. UU.

Sandoval había sido reconocido por la administración de Joe Biden como el bastión principal de la lucha contra la corrupción, mal que, según EE. UU., ha alimentado las condiciones

“Da la impresión de que hay una convergencia autoritaria en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua”.

Francisco Villagrán, exembajador de Guatemala en ONU y OEA

RELACIÓN

Preocupación de EE. UU.

● Roberto Izurieta, analista político y profesor de la universidad George Washington, considera que “el nivel de desarrollo de la democracia y de la transparencia y la lucha contra la corrupción afecta las relaciones de EE. UU. con los países vecinos”.

Citó como ejemplo el deterioro institucional que existe en Venezuela, “cuyas consecuencias vemos en el crimen organizado y, sin lugar a dudas, en la trágica migración”.

Por la cercanía que implica habitar el mismo continente, añadió Izurieta, “el problema del uno es el problema del otro”.

“En términos generales, lastimosamente ha existido un retroceso en casi toda la región: Brasil, Argentina, México, Guatemala, El Salvador... en lo que respecta a la democracia y desarrollo”, aseveró el analista

político.

No obstante, Izurieta cree que el Gobierno de EE. UU. no dejará de apoyar a sus vecinos. “La cooperación económica nos va a ayudar a mejorar la situación de la gente más pobre de nuestros países”, manifestó.

Por tal razón, estos gobiernos deberían “dar la bienvenida” a esta asistencia, así como a otros instrumentos de cooperación “que nos ayuden a vivir con más democracia, transparencia y seguridad”, dijo.

“Deseamos y necesitamos que los países se desarrollen, con mejores estándares y más transparencia, lo que se busca es limitar los efectos negativos de gobiernos dictatoriales y promover el desarrollo de la democracia, el desarrollo económico y el bienestar de nuestros vecinos”, puntualizó Izurieta.

de pobreza que es a su vez la principal causa de la migración irregular en el Triángulo Norte de Centroamérica.

El exfiscal incluso recibió el título de Campeón Anticorrupción, premio otorgado a aquellos que luchan “incansablemente” contra la corrupción y fomentan la rendición de cuentas. Acá se destaca que Giammattei ya se había expresado desfavorablemente de Sandoval, cuando lo señaló de dirigir las investigaciones con sesgos ideológicos.

Además, Porras habría echado a Sandoval justo cuando este se disponía a iniciar una investigación que involucraría al mandatario guatemalteco con supuestos sobornos de ciudadanos rusos para hacerse de un área de la Portuaria Santo Tomás de Castilla.

En respuesta, el Departamento del Estado de EE. UU. no tardó en colocar a la fiscal general en la Lista Engel de sospechosos de corrupción y de socavar la democracia, anunció la suspensión de cooperación con MP y enfatizó en que Porras ya no era una socia de confianza para aquel país.

Luego del escándalo por la remoción de Sandoval, el gobierno de Giammattei se ha limitado a comunicar que “el MP es una entidad autónoma” y que respeta la independencia de las instituciones.

DIFERENCIAS CON EL ISTMO

Diversos detractores del Gobierno señalan que el oficialismo ha cooptado todas las instituciones del Estado y que al igual que ocurre en estos momentos en países como Nicaragua y El Salvador no existe más un sistema de pesos y contrapesos.

Aunque en Guatemala no existe un caudillo como Daniel Ortega o Nayib Bukele, afirman que hay una dictadura corporativa en la cual diversos actores de la cual diversos actores de promueven sus intereses desde el Ejecutivo, Congreso, cortes Suprema de Justicia y de Constitucionalidad, Ministerio Público e incluso el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Hay quienes consideran que Guatemala perdió la oportunidad de construir una relación más cercana y de mayor confianza con EE. UU. ya que al principio



DESCARGUE LA COLECCIÓN

El desgaste de las democracias en Centroamérica

Durante octubre, Prensa Libre publicó cuatro análisis sobre cómo se ha deteriorado la democracia en El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, qué correlaciones presentan los casos y cómo afecta la imagen de la región ante el mundo.

CÓDIGO DE DESCARGA

Con una aplicación que lea códigos QR enfoque su cámara sobre la imagen y descargue el especial.



FOTO: HEMEROTECA PL

Por su posición geográfica, Guatemala es un destino de tránsito de migrantes a EE. UU., y por sus condiciones económicas, también es el origen de miles de indocumentados.

de la administración Biden este Gobierno parecía dispuesto a fortalecer sus lazos con el de Giammattei.

Con esto, se dejó de aprovechar un posible incremento de la cooperación en diferentes ámbitos no solo en el institucional.

Con esta relación antagónica, sin duda, “se están cerrando muchas puertas que costará abrir de nuevo”, opina Francisco Villagrán de León, exembajador de Guatemala ante la ONU y la OEA, quien considera que los aconteci-

mientos ocurridos en los países centroamericanos son “desfavorables” y contribuyen a ese antagonismo.

“Las relaciones con Washington no son buenas y se han enfriado. El debilitamiento de las instituciones del sector justicia en nuestros países y el retroceso democrático ha tenido mucho que ver en esto”, afirma Villagrán.

Añade que pareciera que existe una “confluencia de intereses que han entrado en conflicto con las políticas de Estados

Unidos hacia la región”.

El exembajador precisa que en el campo político da la impresión de que hay “una convergencia autoritaria en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua”, con las mismas amenazas a las democracias, aunque más agudas en el país gobernado por Daniel Ortega.

Prueba de esa “afinidad autoritaria”, agrega, es la abstención de Guatemala en la votación de la OEA sobre las elecciones en Nicaragua con la cual se exige la liberación de los presos políticos, en una decisión que no es congruente con la posición del Gobierno de Guatemala respecto de Venezuela.

“El futuro de Centroamérica se ve sombrío y se vienen tiempos difíciles”, teme Villagrán.

SANCIONES

De no dar muestras de interés de cambiar el rumbo, hay analistas que no ven tan lejana la posibilidad de que EE. UU. imponga sanciones a Guatemala y al resto de países de la región, tal como lo ha hecho con Venezuela. De hecho, en la Ley Renacer, que ya fue aprobada por el Senado, se habla de la posibilidad de dejar fuera a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio.

“Hasta ahora, EE. UU. solo ha recurrido a la presión diplomática, pero las sanciones es una posibilidad que siempre estará sobre la mesa”, expuso Williams Álvarez, licenciado en Relaciones Internacionales y catedrático de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos.

El analista coincide con que en los gobiernos de la región han armado un bloque “antiestadounidense” cuyo objetivo es “no perder los esquemas de poder que han mantenido y los han enriquecido” durante años, y que se ven amenazados por la lucha contra la corrupción, mal que EE. UU. ha determinado como el origen de la pobreza y la migración irregular.

Todo lo que está sucediendo en la región va en la línea de una postura de “cinismo” frente a EE. UU. de que los gobiernos pueden hacer “lo que les da la gana y no les tengo miedo”, apunta Álvarez.

“Estos sectores siempre se han beneficiado del poder y pelean contra la posibilidad de perderlo. Siente que con la lucha contra la corrupción estaban perdiendo ese poder y la mejor manera de garantizarlo es ese vuelco al autoritarismo y a un no ceder frente a EE. UU.”, explicó.

En el caso de Guatemala, Álvarez opina que una forma rápida de evitar posibles sanciones sería la renuncia de la fiscal Porras, o bien sea que el presidente Giammattei le pidiera públicamente revisar su continuidad al frente del Ministerio Público.

Sin embargo, el catedrático universitario ve difícil que suceda cualquiera de los dos escenarios puesto que el MP y el Gobierno van en la misma línea, y en el caso del segundo “está empeñado en ver hasta dónde puede llegar” en su antagonismo contra su par de EE. UU.

“Ha existido un retroceso en casi toda la región (...) en lo que respecta a la democracia y desarrollo”.

Roberto Izurieta, profesor de la universidad George Washington



El mundo Y GUATEMALA